



LA PAZ EN PUNTOS SUSPENSIVOS. UNA CRÓNICA DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA¹

MARZO-ABRIL 2016

Hace seis meses, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, propuso el 23 de marzo de 2016 como la fecha oficial para la conclusión de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, iniciadas en La Habana en el mes de febrero de 2012². Como gesto de buena voluntad, las FARC habían anunciado un cese al fuego unilateral el 20 de julio de 2015. Sin embargo, en la medida en que dicha fecha se aproximaba, se extinguía la ilusión de que se acercaba la conclusión efectiva del proceso de paz. Algunos contemplaban todavía la posibilidad de acordar un cese al fuego bilateral, pero muchos especialistas dudaban de la llegada de este anuncio en plena semana de pascua. El 23 de marzo era, en efecto, el último día laboral en Colombia antes de la llegada de la Semana Santa.

Esa tarde, el jefe del grupo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, declaraba en la televisión: “Tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. [...] No vamos a firmar un acuerdo a cualquier precio. Tiene que ser un buen acuerdo, [...] para todos los colombianos.

¹ Por Matthieu de Nanteuil, profesor de sociología en la Universidad católica de Lovaina, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Democracia, Instituciones, Subjetividad (CriDIS) del Instituto IACCHOS. El autor agradece los comentarios y ayuda en la recolección de datos ofrecida por Andrés Felipe Mora Cortés (profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad católica de Lovaina y la Universidad Nacional de Colombia). Tratándose de una “crónica”, este documento se apoya en la información disponible en la prensa colombiana y no tiene la pretensión de ser un texto científico.

² Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

[...] Un acuerdo con el que se rompe el vínculo entre política y armas”. El día siguiente, *El Espectador*, uno de los dos grandes periódicos del país (de centro izquierda), hacía dos precisiones importantes. De una parte, este fracaso había sido anticipado por el presidente de la República mismo: “Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 (de marzo) a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo”. De otra, los puntos de desacuerdo fueron claramente señalados: “Hay diferencias en torno a las características de las zonas de concentración, las propuestas sobre la dejación de las armas, y los términos del cese de fuego bilateral”.

En Caracol, una de las principales cadenas de televisión, el anuncio relativo al proceso de paz estaba “cercado” por dos eventos: el partido de fútbol que al día siguiente jugaría la selección colombiana de con el equipo de Bolivia en el marco de las eliminatorias al Mundial de 2018, y los atentados ocurridos en Bruselas. Una extraña situación de guerra y paz en la aldea mundial. Yo estaba en Bogotá para asistir, sin grandes ilusiones, a la posible conclusión de las negociaciones de paz en Colombia. Y asistí, en directo, a un acontecimiento que no tuvo lugar –pues persisten diferencias importantes entre los equipos negociadores–, con el trasfondo de los atentados en Bruselas –en el que sobresalía la búsqueda de los terroristas y el supuesto de que Europa “estaba en guerra”. En su reportaje sobre Bruselas, el periodista proclamaba: “La tragedia de Bruselas muestra en qué medida Europa se encontrará en adelante en guerra”. Y ese mismo día, en el titular de *El Tiempo*, el otro gran periódico nacional (conservador y próximo al poder), se podía leer: “Ataque a Bruselas recuerda a Europa que está en guerra”. Como si Europa lo hubiera olvidado... En Colombia, esta doble operación no es extraña: ella permite mantener un enfoque de análisis belicista, confrontado fuertemente por el proceso de paz –aunque parcialmente (cf. *infra*)–. Esto no era premeditado, pero tampoco es una casualidad que uno asista a tal inversión de las prioridades. En todo caso, la paz, en Colombia tanto como en Europa, parece bien lejana.

Sin embargo, en las últimas semanas, otros signos permitían mantener un optimismo razonable frente a la posibilidad de conclusión de las negociaciones de paz. Este optimismo no debe ser comprendido como un optimismo ingenuo: desde el comienzo, el proceso de paz se ha caracterizado por debilidades importantes. Estas se asocian menos con la negociación en sí misma, y se relacionan con la desconexión que progresivamente se ha ampliado entre las negociaciones y la sociedad colombiana; en particular, con los sectores más pobres y marginados. Recurrentemente expuestos al conflicto, estos sectores han sufrido un agravamiento de sus condiciones de vida en los últimos años: crisis económica, tensiones sociales, homicidios frecuentes de líderes de organizaciones sociales... La conclusión de las negociaciones de paz es esencial para el país, pero su concepción y puesta en marcha es bastante problemática. Una vuelta a la dificultad de garantizar la paz en un país complejo.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PAZ

Existen dos características generales que deben ser señaladas para comprender las particularidades del proceso de paz en Colombia. Estas características lo distinguen claramente de otras iniciativas comparables, como la de África del Sur o la de Irlanda:

1. **La primera es que los actores presentes en las negociaciones de paz no representan al conjunto de actores que, después de varias décadas, han alimentado la violencia en Colombia por medio o más allá del conflicto armado.** El gobierno y las FARC –una de las guerrillas más antiguas en América Latina– constituyen ciertamente actores muy significativos. Pero existen otros actores importantes. Los grupos paramilitares de extrema derecha se han opuesto sistemáticamente al proceso. Estos grupos entienden deshacerlo de diferentes maneras, entre ellas la influencia política (cf. *infra*). Los actores del narcotráfico no pueden, por definición, ser incluidos en la negociación: esto significaría ofrecerles una legitimidad incomprensible. En cuanto a la delincuencia común, ésta escapa inevitablemente a toda representación pública organizada. Existen vínculos recurrentes y complejos entre estos actores. No obstante –y contrariamente a lo visto en otros procesos de paz–, se trata de adversarios que, a pesar de hacer presencia sobre todo el territorio nacional, no son ligados por una negociación “entre protagonistas”.
2. **La segunda es que el vínculo entre los actores de la negociación y el resto de la sociedad colombiana no se puede suponer como existente.** Lejos de toda posibilidad de identificación espontánea, y de manera semejante a lo que ocurre en numerosos países, franjas enteras de la sociedad colombiana profesan un gran escepticismo frente a las élites políticas nacionales. Por su lado, las FARC se pueden beneficiar de su arraigo rural en algunas regiones. Pero, directamente asociadas al conflicto armado, no suscitan identificación a escala nacional. Si a ello se agrega que la sociedad colombiana permanece geográfica y socialmente fragmentada –incluso si las líneas de esta fragmentación han cambiado a lo largo de la última década–, se entiende porqué la mirada que los colombianos tienen sobre el proceso se ubica entre el optimismo lúcido y el escepticismo. Muchos temen que el proceso tenga como soporte exclusivo el apoyo de las clases medias urbanas, vinculadas a una parte de la clase dirigente. La organización Planeta Paz –que reagrupa a los líderes de numerosos movimientos sociales vinculados a la paz en Colombia– distingue al menos cinco actitudes de las clases populares frente al proceso: “favorable, dubitativa, opuesta, escéptica y asertiva”.

UNA BREVE GENEALOGÍA POLÍTICA: ENTRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD

Estas características explican igualmente porqué es importante proceder a realizar una breve presentación del contexto político en el que el proceso de paz ha tomado forma. No es posible comprenderlo sin reconocer que tal proceso emerge después de casi un decenio de política autoritaria, marcada por la conquista y el control del poder por Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010), el “George W. Bush” colombiano, apoyado fuertemente por este último. Sus gobiernos sucesivos se opusieron constantemente a la paz y han terminado por polarizar la sociedad colombiana, con todos excesos que de allí se desprenden.³

³ A pesar de las tentativas secretas de contactar a las FARC para una posible negociación, el presidente Álvaro Uribe no ha dejado de criticar la menor apertura en relación con esta guerrilla. Esta posición la ha retomado hoy, en tanto adversario proclamado de las negociaciones de paz de La Habana. Al respecto ver: <http://www.semana.com/nacion/articulo/los-contactos-secretos-de-uribe-con-las-farc/405318-3>

En retrospectiva, el periodo 2002-2010 estuvo marcado por tres características importantes:

- 1. Una recomposición del tablero político nacional bajo el efecto de la extrema derecha.** La división histórica de la vida política entre conservadores y liberales –relatada en *Cien Años de Soledad*– le cedió el paso a la emergencia de nuevos partidos políticos. Históricamente Álvaro Uribe había pertenecido al partido liberal. Pero el 31 de agosto de 2005, tres años después de su primera elección, Juan Manuel Santos –en ese entonces uno de sus principales colaboradores– decidió crear “el Partido de la U”. Se trataba de hacer converger los diputados y senadores pertenecientes a distintos partidos políticos alrededor del proyecto político uribista. De hecho, a pesar de la polarización profunda que se producía en la sociedad, dicho proyecto logró un consenso extendido al interior de las élites colombianas.

Sin poder buscar un tercer mandato –la Constitución lo prohíbe– y teniendo que enfrentar la competencia de sus allegados –la de Juan Manuel Santos en particular, quien lo sucedió en 2010 y fue reelegido en 2014–, Uribe dejó su partido para crear en enero de 2013 el denominado “Centro Democrático”. Un partido político cuyo nombre contrasta de manera abierta con la presencia y la consolidación en la extrema derecha en la vida política nacional.

Estos cambios han terminado por conmocionar los hitos más antiguos del sistema político. De manera similar al partido conservador, del cual era el adversario histórico, el partido liberal cayó en un debilitamiento electoral más profundo que el que había sufrido a finales de la década de 1990. Por su parte, el “Polo Democrático Alternativo” (PDA), que reagrupa un gran número de partidos de izquierda, supo emerger como un espacio político apropiado entre las guerrillas y las élites políticas tradicionales⁴. Pero sus querellas intestinas entre líderes y/u orientaciones políticas no le permitió constituirse en una verdadera alternativa a los poderes dominantes. El partido “Alianza Verde” –que ha tenido diferentes denominaciones a lo largo de la última década–⁵ se ha mantenido como un actor menor, incluso si se tienen en cuenta las estrategias de alianza de las que se ha beneficiado a escala local.

Sobre las ruinas de tales recomposiciones, el “uribismo” –así denominado en Colombia–, ha sabido constituir paulatinamente un núcleo ideológico y político coherente. ¿Cuál es su horizonte? Una visión autoritaria de la acción pública fundada sobre una práctica política abiertamente belicista, y un discurso de la seguridad que se acompaña por el impulso a la inserción plena de Colombia en la división internacional del trabajo, la violación de los derechos fundamentales, y la vulneración de las instituciones que se supone deben protegerlos. Tales son las características de un movimiento político todavía muy fuerte que en la actualidad ha encontrado una nueva razón de ser: socavar por todos los medios el proceso de paz.

⁴ Este partido tiene como origen la alianza sellada el 24 de noviembre de 2005 entre dos coaliciones de izquierda: el “Polo Democrático Independiente” y “Alternativa Democrática”.

⁵ Inicialmente se denominó “Opción Verde” y, posteriormente, “Alianza Verde Opción Centro”.

2. **La incorporación cada vez más fuerte de Colombia en la división internacional del trabajo.** Uno de los elementos fundamentales que explica la persistencia y antigüedad del conflicto armado en Colombia es la riqueza de su subsuelo y sus recursos energéticos, mineros y agrícolas. A lo largo de la primera década de 2000, la estrategia del poder colombiano ha consistido en crear las condiciones de un desarrollo económico cada vez más rápido, lo cual ha agudizado el conflicto armado –y los conflictos sociales y culturales que lo sustentan–. Para avanzar en esta estrategia, el uribismo procedió en dos tiempos:

- Primeramente, defendió **un modelo de desarrollo neoliberal** fundado en el extractivismo y la instalación de megaproyectos agroindustriales en territorios económicamente estratégicos. Esta política ha sido acompañada por un debilitamiento sistemático de las resistencias populares, las cuales ya se encontraban golpeadas por causa de la persistencia del conflicto armado. Este proceso se ha traducido en la criminalización del movimiento social y el asesinato recurrente de sindicalistas, siendo Colombia el país que en este aspecto detenta el “récord mundial”⁶;
- De manera paralela, el uribismo brindó **garantías a las clases medias urbanas** – ofreciendo mayor seguridad a las ciudades–, y protegió **las inversiones extranjeras** – estableciendo beneficios fiscales a las multinacionales y proporcionándoles apoyos de seguridad mediante las acciones del paramilitarismo–. Vale recordar que el paramilitarismo es en Colombia uno de los actores clave de la “guerra sucia” que destruye el país después de varias décadas, y es el responsable de una gran parte de los abusos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, y violaciones a los derechos humanos fundamentales sobre el conjunto del territorio (cf. *infra*).

Durante el periodo 2002-2010 Colombia asistió, por lo tanto, a un crecimiento del PIB en una situación de la intensificación de los intercambios económicos y profundización del conflicto armado.

3. **La construcción progresiva de una cultura de la impunidad, adjudicada a un patriotismo agresivo.** Sin la intención de señalar aquí el conjunto de cifras relativas a la situación de los derechos humanos en Colombia, vale la pena subrayar algunos hechos prominentes.

- Consagrada en 2006 con el fin de facilitar la reintegración de los grupos paramilitares a la vida civil, asegurando la confesión de sus crímenes, la **Ley de “Justicia y Paz”** – inicialmente denominada “Ley de Alternatividad Penal” – fue apoyada por los principales jefes paramilitares, que vieron allí una posibilidad de legitimar sus posiciones y sus prácticas. Exigiendo la dejación de armas y la confesión espontánea

⁶ Entre 1977 y 2013, más de 3.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia. Aunque en promedio, el ritmo de asesinatos ha exhibido una disminución progresiva a lo largo de dicho periodo – 282 fueron asesinados en 1996, 51 en 2010– las amenazas de las que han sido víctimas nunca han desaparecido, y la tasa de cobertura de las convenciones colectivas del trabajo ha caído de manera constante. Por otra parte, mientras que la tasa de sindicalización era ligeramente superior al 10% a mediados de la década de 1970 (12,5% en 1974), esta ha caído a uno de los niveles más bajos de toda América Latina (4,6% en 2005). Al respecto ver: Escuela Nacional Sindical (ENS). En todo caso, Colombia continúa siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Ver : <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-pais-mas-peligroso-para-sindicalista/341867-3>

de los crímenes, dicha Ley ofrecía incentivos en términos de penas de prisión reducida (entre 5 y 8 años) sin importar la gravedad de los crímenes. Además, la Ley abría la vía a una reinserción de los autores de los crímenes a la vida civil, absteniéndose de controlar sus acciones efectivas.

- Fuertemente criticada por las principales ONG defensoras de los derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, etc.), la “Ley de Alternatividad Penal” fue declarada parcialmente inconstitucional, después de haber sido votada en el Congreso de la República. En la práctica, **su implementación ha ofrecido resultados mixtos**: pues aunque ha permitido a las organizaciones de víctimas asumir un relativo protagonismo en un debate que tradicionalmente les era ajeno y le ha facilitado a algunas familias conocer la verdad sobre las violaciones que las han afectado, la ausencia de proporcionalidad entre las penas y los delitos cometidos por los paramilitares hace que se configure una situación que se aleja por completo de lo exigido por las normas de la justicia penal internacional. Y esta historia tuvo una continuación aún más radical... En el marco de una creciente presión jurídica nacional e internacional, sabiendo su vínculo con el paramilitarismo –en particular, con la creación de las denominadas “Cooperativas de Seguridad Convivir” cuando fue gobernador de Antioquia–, Álvaro Uribe ordenó la extradición de varios jefes paramilitares hacia Estados Unidos, en mayo 2008. Con esto, parece convertirse en un adversario de sus antiguos aliados. Sin embargo, a pesar de esta lucha entre actores criminales, Uribe dispone de fuertes apoyos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Y los grupos paramilitares, lejos de haberse desmovilizado, han tomado nuevas formas...
- Pero existe otra característica de dicha cultura de la impunidad: **la parapolítica**. Mediante esta expresión se quiere indicar que la influencia del paramilitarismo no se limita únicamente a la defensa de diversos intereses económicos o políticos locales. Los grupos paramilitares de extrema derecha han logrado penetrar las instituciones políticas de nivel nacional, particularmente el Congreso de la República, donde disponen de una influencia creciente, relacionada con la sumisión de varios senadores y representantes al poder –y sus conexiones paramilitares– o la convergencia de muchos de ellos con la identidad paramilitar misma⁷. Una de las características fundamentales del actual proceso de paz, es que se desarrolla en presencia de instituciones políticas que impiden el desmantelamiento de las estructuras del paramilitarismo y favorecen la impunidad de los crímenes que han sido cometidos en su nombre.
- Dos ejemplos sirven para ilustrar los efectos concretos de dicha cultura de la impunidad: **el episodio de los denominados “falsos positivos”** y **el descrédito sistemático al que han sido sometidas las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales**. En el primer caso, la estrategia del gobierno de Uribe, consistió en proponer incentivos monetarios a todos los militares que lograsen capturar o abatir guerrilleros. Esta mercantilización de la persecución condujo a

⁷ En 2010 el “Partido de Integración Nacional” logró la elección de varios diputados al parlamento colombiano en tanto que expresión política del paramilitarismo.

distintos individuos de las fuerzas armadas a seleccionar jóvenes inocentes, asesinarlos y vestirlos de guerrilleros para mostrar pruebas de una supuesta eficacia de la “guerra contra el terrorismo”. Generalmente provenientes de clases populares y sometidas a una violencia ciega, las víctimas de estos actos no han podido acceder a dispositivos judiciales confiables⁸. Paralelamente, fueron evidentes las tensiones y críticas proferidas desde el gobierno de Uribe a las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales; entre ellas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos⁹. Si hubo una característica propia del uribismo, fue el uso de una retórica groseramente insultante en contra de los defensores de los derechos humanos, del sistema de justicia internacional (CPI, CIDH, etc.) y de los valores que intentan defender. De hecho durante este periodo se evidenció un incremento de la violencia en contra de los defensores de los derechos humanos, particularmente en las zonas rurales en las que no se dispone de recursos mediáticos y judiciales que eviten la comisión de dichos delitos¹⁰.

- Finalmente, en el marco de un contexto geopolítico colmado de tensiones – Venezuela y Ecuador fueron en su momento países dirigidos por gobiernos ideológicamente opuestos–, los procesos anteriormente mencionados fueron acompañados por un llamado al “sentimiento nacional” y por la puesta en marcha de un patriotismo agresivo. El uribismo no puede ser comprendido sin una alusión a la **geopolítica regional**: esta le sirvió de pretexto para reforzar la política de seguridad interna adoptando en relación con los países vecinos una supuesta situación de Colombia como un Estado “amenazado por potencias extranjeras”.

⁸ En junio de 2013, el servicio de derechos humanos de la Fiscalía había recibido denuncias de 2.278 casos de “ejecuciones extrajudiciales ilegales” perpetradas por agentes del Estado que habían afectado a cerca de 4.000 víctimas y producido 189 condenas. Dichas condenas han involucrado 605 miembros de las fuerzas militares de los cuales 91 son oficiales superiores. La mayor parte de las condenas se han proferido sobre militares de grado inferior: aunque más que de 40 coroneles o tenientes coroneles han sido objeto de investigaciones, únicamente 4 han sido condenados hasta el día de hoy. Al respecto ver: <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/hrw-advierde-posible-impunidad-falsos-positivos-con-acuerdo-justicia-con-farc>

⁹ Entre 2002 y 2006, el gobierno de Álvaro Uribe intentó expulsar de Colombia a la Oficina del Alto Comisionado. Pero posteriormente debió aceptar su presencia en el país debido a la presión de la Unión Europea. En todo caso, Uribe redujo las prerrogativas de dicha oficina y rechazó de manera permanente los análisis y aportes desde ella realizados.

¹⁰ Entre 2002 y 2011, 1.470 agresiones contra los defensores de derechos humanos han sido registradas. De las 239 agresiones reportadas en 2011, 49 fueron asesinatos. Para ese mismo año, 116 organizaciones sociales o de defensa de los derechos humanos fueron objeto de agresiones relacionadas con atentados a la vida y/o a la integridad de sus miembros. Por otra parte, los ataques contra los líderes de las organizaciones de personas desplazadas, que exigían la restitución de sus tierras, constituía una enorme preocupación. En 2011, 28 responsables de organizaciones campesinas, víctimas del desplazamiento forzado o del despojo de tierras, que estuvieron comprometidas con los procesos de restitución de tierras, fueron asesinadas. Al respecto ver: Observatorio Colombiano para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2012. La organización Forjando Futuros, ONG especializada en el seguimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 del 10 de junio de 2011– ha registrado hasta el día de hoy 87.118 demandas de reparación a lo largo del territorio colombiano. Entre ellas, únicamente 2.943 han recibido tratamiento; es decir tan solo un 3,4% del total. Los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojo son fundamentalmente pequeños propietarios: 21% explotan tierras de menos de una ha, 55% tierras entre 1 y 10 ha, 20% entre 10 y 50 ha. Los actores o situaciones que explican el desplazamiento forzado en Colombia son los siguientes: 55% son explicados por la acción de grupos paramilitares, 19% por confrontaciones armadas, 13% por causa de acciones guerrilleras, 7% por la influencia de grupos no identificados, 5% por las denominadas “bandas criminales” y 1% por el ejército nacional. Al respecto ver: “La restitución de tierras no avanza en los departamentos”, Forjando Futuros, 30 de marzo de 2016.

En este contexto emergió el proceso de paz en Colombia. Iniciado el 23 de febrero de 2012 por el presidente Juan-Manuel Santos (2010 – 2018), un año y medio después de su elección en junio de 2010, el proceso de paz es el fruto de un hombre y de una administración que aunque provenientes del partido conservador e históricamente próximos al expresidente Uribe, progresivamente se han distanciado de este último.

Esta evolución interna en la derecha colombiana ha ocurrido de manera paralela a la generación de cambios al interior de las FARC. Actor fundamental del conflicto armado, que sustituyó su proyecto inicial de emancipación por una estrategia exclusivamente de guerra y responsables de numerosos abusos, desplazamientos forzados, secuestros, y violaciones de derechos humanos, las FARC terminaron por reconocer que la lucha armada no los llevaría a ningún lugar. Consolidándose inicialmente como el actor exclusivo con el que el gobierno había iniciado las negociaciones –la otra guerrilla (ELN) acaba de iniciar su propio proceso (cf. *infra*)–, las FARC intentan no únicamente canjear su impunidad y proteger sus intereses territoriales sino también constituirse como un actor político capaz de influir en el futuro del país –de manera semejante al Sinn Fein en Irlanda–. Sin embargo dicho objetivo está lejos de ser conquistado pues el camino hacia la paz parece largo todavía.

Globalmente, el proceso de paz aparece como un sendero particularmente estrecho. Es el resultado de los cambios y continuidades en relación con el poder gubernamental precedente:

- **políticamente**, la ruptura con el uribismo se ha traducido en el inicio de las conversaciones de paz –con el acompañamiento de Cuba y Noruega– aprovechando el apoyo del gobierno norteamericano y desarrollándose en el marco de una metodología original¹¹. Sin embargo, Juan Manuel Santos estuvo próximo a la derecha radical, y permanece vinculado a una cultura de orden y de autoridad ;
- **económicamente**, la diferencia principal con el gobierno precedente se asocia con los análisis realizados alrededor del impacto del conflicto armado en el desarrollo del país: por largo tiempo considerado por las élites económicas como funcionalmente conforme a una estrategia de crecimiento económico, el conflicto se convirtió en un factor cada vez más disfuncional. Se trata de un cambio mayor con respecto a aquel que sirvió durante largo tiempo de “doctrina implícita” para las élites del país. Sin embargo, para dichas élites el modo de desarrollo esencialmente neoliberal debe permanecer intacto: ha sido considerado como no negociable por el gobierno colombiano. Pero en un contexto de múltiples desigualdades sociales, tal modelo permanece vinculado a numerosos conflictos sociales que intentan resolverse a través de diversos tipos de violencia: estigmatización, desplazamiento de

¹¹ La particularidad de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana es que los negociadores (gobierno colombiano y FARC) se han fijado una serie de temáticas en las cuales ellos negocian acuerdos parciales. Sin embargo, ningún acuerdo es considerado como definitivo en tanto no se haya llegado a un consenso final que sea ratificado mediante un acuerdo general para el cese del conflicto armado. Al día de hoy, 4 acuerdos han sido firmados, cada uno relacionado con un asunto específico: “Reforma Rural Integral”, “Participación Política”, “Drogas Ilícitas” y “Situación de las Víctimas”. Dos puntos de negociación se encuentran todavía en discusión: “Dejación de Armas para el Fin del Conflicto” y “Mecanismos de Refrendación del Acuerdo”.

poblaciones, homicidios, etc. Así, es posible que el proceso de paz deshaga progresivamente el vínculo entre la conflictividad social y sus expresiones militares, pero es poco probable que se traduzca, en el corto plazo, en una disminución de la conflictividad en sí misma y de los riesgos de violencia que le son inherentes;

- por último, **en el plano jurídico**, el proceso de paz tiene como objetivo romper con la cultura de la impunidad. Esto a través de una renovación del vínculo con las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales, y de la implementación de rigurosos procedimientos de justicia transicional. No obstante, numerosos crímenes y violaciones a los derechos se cometen en la actualidad, los cuales no han sido canalizados a través del tratamiento judicial adoptado. Adicionalmente, el lugar de las organizaciones de las víctimas en el futuro dispositivo de justicia transicional es objeto de debate.

EN LA PRENSA: OBAMA Y KERRY EN CUBA. Y LOS LÍDERES SOCIALES CONTINÚAN SIENDO ASESINADOS...

Al margen de la visita histórica del presidente Obama a Cuba –y de los “agradecimientos” que le ha expresado al gobierno cubano por su apoyo al proceso de paz colombiano– **otra visita avanzaba, no menos histórica: el encuentro oficial entre el secretario de Estado americano, John Kerry, y la delegación de las FARC.** De acuerdo con *El Espectador* del 22 de marzo, se trató de un “diálogo histórico”. “Se sabe que la posición de Washington es más que un formal impulso al proceso de paz para que no se siga dilatando. [Sin embargo], es claro que, además de lo social, también hay intereses económicos, políticos y obviamente militares. [...] Lo que afirman los jefes guerrilleros [es] que así como el papel de los Estados Unidos fue crucial para la guerra, ahora sea determinante para la paz”. En su edición del mismo día *El Tiempo* precisaba: “Esta es la primera vez, desde que comenzaron los diálogos, que un funcionario estadounidense de tan alto nivel acepta –a petición del gobierno de Colombia– reunirse con el grupo ilegal”. Según este diario, las demandas emitidas por las FARC dirigidas al gobierno nacional se relacionaban con “la ayuda que Washington debería proporcionar para frenar la violencia paramilitar” y, más ampliamente, con la posibilidad de ser “reconocidos como una fuerza política”. A su turno, la Casa Blanca anunció una nueva ayuda para garantizar la seguridad de los guerrilleros que renunciaran a la acción armada.

Esto debido a que en la memoria de la guerrilla permanece intacta la erradicación de la casi totalidad de los miembros de la Unión Patriótica en la década de 1980. Vale recordar que la Unión Patriótica es una plataforma de partidos de izquierda que intenta conquistar el poder renunciando a la acción armada. Esta plataforma sirvió de espacio para la reconversión de numerosos guerrilleros antes de ser eliminada del mapa político a través de lo que diversos especialistas llamaron un “particidio”, e incluso un “genocidio”. Siguiendo a *El Tiempo* nuevamente: “Este es uno de los temas sensibles para la FARC, pues dicen que sin garantías se puede repetir el escenario de finales de los 80 cuando se dio el genocidio de la Unión Patriótica”.

Pero la semana en que debieron concluirse las negociaciones de paz fue igualmente marcada por la vigencia de la violencia paramilitar. Aquí un hecho lo suficientemente grave para ser señalado por el diario próximo al poder: “En los últimos días una oleada de denuncias por asesinatos de líderes sociales y amenazas contra otro número significativo de ellos llegó a la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia, al Ministerio de Interior, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección” (*El Tiempo*, 21 de marzo). Mencionando los nombres de 7 líderes asesinados a lo largo del último mes, dicho diario precisa que tal situación no constituye simplemente una alerta para los movimientos sociales, sino también, para el proceso de paz en su conjunto. Los hechos hablan por sí mismos: mientras que los movimientos sociales disponen en la actualidad de dos organizaciones aglutinadoras –La Marcha Patriótica próxima a las FARC, y el Congreso de los Pueblos cercano al ELN– varios de sus líderes han sido objeto de intimidaciones y/o han sido asesinados. Según la ex-senadora Piedad Córdoba, figura política que se considera favorable al proceso de paz, 28 líderes de organizaciones sociales habrían sido asesinados durante ese último mes. Por su parte, Carlos Salgado, director de Planeta Paz, afirma que son 87 los asesinatos cometidos contra líderes sociales en lo que va corrido del año 2016. Según informaciones ofrecidas por la Marcha Patriótica, “112 de sus miembros han sido asesinados desde su creación en 2012” (*El Espectador*, 18 de marzo)¹².

No obstante, un evento que permite creer nuevamente en el proceso de paz tuvo lugar el 31 de marzo pasado: el ELN, la otra guerrilla colombiana, anunció su interés por iniciar una negociación de paz y renunciar a la lucha armada¹³. Se trata de un hecho sumamente importante, pues sus acciones servían de argumento para la oposición uribista y más ampliamente para todos aquellos que intentaban socavar el avance y consolidación del proceso de paz.

Sin embargo, esta permanente coexistencia de contrarios es una característica importante del proceso de paz colombiano. Esta situación muestra la fragilidad de un proceso que para muchos políticos internacionales –como el representante de la Unión Europea para la paz, Eamon Gilmore– ha llegado a un punto de irreversibilidad. Este es también el punto de vista de Iván Cepeda, senador del “Polo Democrático Alternativo” (PDA) próximo a los movimientos de víctimas: “El proceso de paz ha entrado en su fase final”. Si la Alta Comisaria para el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Kate Gilmore, “considera que Colombia está en la víspera de un cambio extraordinario”, otras voces se hacen escuchar para exigir una protección reforzada para los defensores de los derechos humanos en un contexto de recrudescimiento de la violencia paramilitar. “Los grupos paramilitares se sienten amenazados por los avances del proceso de paz” (*El Espectador*, 24 de marzo). Una situación de este tipo supone que el Estado colombiano construya garantías efectivas para que la implementación de los acuerdos no degenere en un baño de sangre. Pero también, estas circunstancias implican la participación de las instituciones internacionales que han apoyado el

¹² Al respecto ver: <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mujeres-de-marcha-patriotica-se-toman-iglesia-bogota-as-articulo-623034>. La tendencia de estas cifras parece mostrar una aceleración del ritmo de asesinatos en comparación con lo observado en el año precedente. En 2015, se hablaba de 105 asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes de organizaciones sociales. Ver: <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinatos-de-lideres-sociales-en-2015/16546681>

¹³ Ejército de Liberación Nacional (ELN).

proceso: ONU, Estados Unidos y Unión Europea. De hecho, el recrudecimiento de la violencia paramilitar se explica en gran medida por los avances del proceso de paz.

Para entender la complejidad de la situación de Colombia, conviene alejarse de manera definitiva de una visión abstracta de “la paz”. Esto se justifica si se considera que la perpetuación de las violencias efectuadas contra los líderes sociales no puede ser comprendida sin hacer alusión a lo que los especialistas llaman “el orden social y territorial de la violencia”. En efecto, es a escala local, particularmente en el marco de conflictos alrededor de la posesión y control de los recursos naturales, que se organiza y se reproduce la violencia en Colombia. Si la paz tiene alguna posibilidad de concretizarse, será bajo la condición de encontrar relevos ubicados en los territorios que permitan deshacer tal círculo vicioso. Todo aquello implica, nuevamente, cuestionar el modelo de desarrollo económico del país...

EL ORDEN SOCIAL Y TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA ... Y DE LA PAZ

Es esencial comprender hasta qué punto la violencia –y por lo tanto la paz– responde a una dinámica territorial específica. Más concretamente, se hace necesario reconocer la forma como las violencias que alimentan el conflicto armado se definen por el acceso a la tierra, el control de territorios ricos en recursos, la expulsión de la población de zonas controladas por los actores de la guerra, pero también por los agentes económicos que intentan proteger sus intereses, etc. En otros términos, resulta imposible analizar la violencia en Colombia sin definir hasta qué punto ella se asocia a los desafíos territoriales. Sin embargo, esta violencia no es solamente la expresión de una suerte de caos local: al contrario, ella evidencia lo que los especialistas denominan “el orden social y territorial de la violencia”.

Sobre el terreno los actores armados se confrontan y tienen vínculos complejos con la población civil que someten a su estrategia violenta. Pero en un país fragmentado, donde la presencia del Estado constitucional de derecho no es totalmente asegurada –el Estado se presenta frecuentemente por medio de las fuerzas armadas o de policía, que son a su turno partes importantes del conflicto armado, sin olvidar sus vínculos con el paramilitarismo–, los actores armados organizan la vida social: ellos pueden llegar a controlar las alcaldías, las escuelas, los hospitales, e incluso, pueden crearlos. Ellos extorsionan a todo aquel que se oponga a este cuadro autoritario o los hacen desaparecer (desplazamientos forzados, homicidios, masacres). Ellos pueden también ser llamados a proteger ciertas poblaciones de las incursiones de un actor adverso, sometiendo sin embargo a las personas a un orden autoritario brutal.

En este contexto, los especialistas que fueron entrevistados señalan un cierto número de preocupaciones que presento aquí a manera de conclusión:

1. **Aunque se asiste a una disminución de las violencias directamente asociadas a la confrontación militar, los denominados conflictos “territoriales” no dejan de incrementarse¹⁴** ¿Cómo garantizar que estos conflictos no desemboquen en una retoma de la lucha armada? Estos conflictos se encuentran directamente relacionados con el modo de desarrollo del país, basado en una estrategia neoliberal consolidada, tal y como lo atestiguan distintos actores sindicales pero también campesinos ¿Hasta dónde la paz podrá sostenerse sin que esta cuestión sea abordada frontalmente? Más aún, ¿Cómo evitar que en un caso de repliegue de las FARC y del ELN los grupos paramilitares no ingresen de manera masiva en dichas zonas?
2. **Es justamente alrededor de estas mismas cuestiones que el movimiento social se hace sus propios interrogantes.** A pesar de la variedad de puntos de vista –unos estiman que el proceso de paz es necesario; otros se oponen insistiendo en que el proceso ha sido acompañado por un deterioro de la situación económica y la continuación de las violencias; y por último algunos lo favorecen pero temen las represalias de los grupos paramilitares–, es claro que uno de los principales desafíos para el movimiento social será avanzar en la puesta en marcha de lo acordado. En efecto, es en este terreno en el que el verdadero rostro de la paz emergerá en el curso de los próximos años.
3. **Finalmente, en una época en la que las élites políticas sufren en Colombia como en otros lugares un descrédito sin precedentes, es esencial que los sectores más pobres y marginados de la sociedad colombiana gocen de una mejoría en sus condiciones de vida.** En un país marcado por desigualdades masivas, y donde la riqueza se ha producido históricamente en y a través del conflicto armado, esta cuestión no puede ser dejada de lado. Sin darle una respuesta a la misma, será la totalidad del proceso de paz la que estará en riesgo de sufrir las consecuencias.

Una vez más: es importante desligarse de una representación abstracta de “la paz” para señalar más bien su carácter extremadamente concreto. El Estado colombiano tiene una responsabilidad fundamental al respecto. Así como los Estados Unidos y la Unión Europea que han reiterado la importancia de acercarse al proceso de paz...sabiendo que son los principales socios económicos de Colombia. En el contexto de la aldea global, la paz no concierne solamente a los colombianos, sino al conjunto de la comunidad internacional.

¹⁴ El Observatorio Nacional de Paz, en el cual participa la organización Planeta Paz, ha identificado 1.200 conflictos territoriales en curso a partir de un estudio en 4 regiones del país: noreste, suroeste, caribe y centro, las cuales comprenden un total de 19 departamentos. Ver: “Actores y dinámicas de la conflictividad territorial”, en: <http://www.planetapaz.org/biblioteca/nuestras-publicaciones/ultimas-publicaciones-planeta-paz>

----- **Personas entrevistadas** -----

- Hugo FAZIO, profesor de historia contemporánea, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
- Astrid FLÓREZ, profesora de ciencia política en la Fundación Universitaria Navarra, doctorante en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad Nacional de Colombia.
- Carolina JIMÉNEZ, investigadora de la ONG Planeta Paz.
- Leopoldo MÚNERA, profesor en ciencias políticas en la Universidad Nacional de Colombia, director del Observatorio Nacional de Paz.
- Carlos SALGADO, director de la ONG Planeta Paz.
- Gerardo VEGA, director de la ONG Forjando Futuros.